# 

**FALTAS ADMINISTRATIVAS.**

ELABORÓ: PASTOR MARTÍNEZ BRIANDA GUADALUPE.

MONTES CABRERA ARAM YAEL.

CARRERA: DERECHO.

Instituto de Estudios Legislativos, Estado de México, Av. Hidalgo Poniente, Número 404, Colonia de la Merced Alameda, C.P. 50080, Toluca, Estado de México “. “FALTAS ADMINISTRATIVAS”.

INVESTIGACIÓN RECOPILATORIA

MAP. Ma. Isabel Selene Clemente Muñoz

Vocal Ejecutiva del Instituto de Estudios Legislativos

L.D. Arturo Salas Ramírez

Supervisor de Capacitación del Instituto de Estudios Legislativos

PASTOR MARTÍNEZ BRIANDA GUADALUPE.

MONTES CABRERA ARAM YAEL.

ESTUDIANTES EN DERECHO.

ABRIL 2022

[CONTENIDO 4](#_Toc100563782)

[**INTRODUCCIÓN.** 5](#_Toc100563783)

[**FALTAS ADMINISTRATIVAS.** 6](#_Toc100563784)

[**CONCEPTO DE FALTA ADMINISTRATIVA.** 9](#_Toc100563785)

[**¿QUÉ ES LA FALTA O RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA?** 9](#_Toc100563786)

[**LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.** 10](#_Toc100563787)

[**SUJETOS DEL SISTEMA.** 10](#_Toc100563788)

[**OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD EN LA CPEUM.** 12](#_Toc100563789)

[**AUTORIDADES COMPETENTES PARA INVESTIGAR, SUBSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.** 13](#_Toc100563790)

[**ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO EN LA CPEUM.** 13](#_Toc100563791)

[**SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE.** 14](#_Toc100563792)

[**LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.** 17](#_Toc100563793)

[**SUJETOS DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA LGRA** 17](#_Toc100563794)

[**OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD.** 18](#_Toc100563795)

[**IMPOSICIÓN DE SANCIONES.** 22](#_Toc100563796)

[**CONCLUSIÓN.** 32](#_Toc100563797)

[**BIBLIOGRAFÍA** 33](#_Toc100563798)

# **INTRODUCCIÓN.**

Es importante analizar este tema porque los servidores públicos pueden cometer dichas faltas, pero sin darse cuenta o a pesar de serlo, desconocen de las faltas administrativas en que puedan incurrir.

El derecho administrativo, posee herramientas que ayudan a tener contrapesos en el correcto funcionamiento de este, un claro ejemplo son las faltas administrativas, por ello, muchas veces nos preguntamos: ¿para qué existen las leyes? la respuesta es muy simple: las leyes existen para regular la conducta de los individuos que viven en sociedad, desde las legislaturas se crean mecanismos que otorguen la seguridad jurídica pertinente para el correcto uso de las normas.

Una ley es una idoneidad escrita que enuncia el acuerdo de una sociedad en cuanto a los derechos y obligaciones de las personas que la integran.

Las leyes son obligatorias para todas las ciudadanas y los ciudadanos; pensando en el bien común. Por ello es necesario que existan instituciones de gobierno o instituciones privadas que vigilen su cumplimiento y aplican sanciones a quienes las violan.

Por diversas razones, algunas personas no cumplen con lo establecido en las leyes, perjudicando con ello las normas de convivencia y generando una alteración al estado de bienestar social colectivo. Estas conductas son los delitos y las llamadas administrativas.

Se toma como punto focal de la investigación a las Faltas Administrativas que cualquier servidor público pueda cometer dentro de sus funciones laborales, así mismo se retoma el Proceso Administrativo o Dogmática Administrativa, ya que se tomarán en cuenta los principios administrativos dentro de este tema.

De igual manera se analizarán las legislaciones o en general los ordenamientos normativos que regulan dichas faltas y saber cómo sancionarlas.

# **FALTAS ADMINISTRATIVAS.**

“La responsabilidad de las servidoras y los servidores públicos se ha constituido en una de las principales preocupaciones tanto de quienes nos gobiernan como de la ciudadanía. Frecuentemente se hace alusión a enunciados como el siguiente:

“la actuación de las servidoras y los servidores públicos debe necesariamente apegarse al marco normativo que los rige y no debe de ninguna manera excusarse al funcionario o la funcionaria que lo viole. Esta preocupación se ha visto reflejada en las numerosas y continuas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y a sus leyes reglamentarias

La responsabilidad administrativa, en estricto sentido y referida a la sancionadora y no resarcitoria, fue contemplada desde la Constitución de Apatzingán, mediante el llamado Juicio de Residencia., más adelante y en un contexto más reciente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma de 1982 relativa al título cuarto de la CPEUM. El propósito fundamental de esta reforma fue la llamada renovación moral. Destaca que en estas reformas se incluye por primera vez el término servidor público, se aumenta el catálogo de lo que se entiende por responsables ante la administración, se limita la procedencia del juicio político y se detalla su prohibición por la mera expresión de ideas, se precisan como principios rectores del actuar de las servidoras y los servidores públicos los de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y por último se eleva a rango constitucional como falta el enriquecimiento ilícito de quienes integran el servicio público (Cossio, 2017).

Con el inicio del siglo XXI y la creación de instituciones para el fortalecimiento de la democracia como el servicio civil y el sistema de transparencia, la creciente presión de la sociedad civil por un combate eficaz contra la corrupción, dado los escándalos frecuentes respecto a acciones ilegales de servidoras y servidores públicos y particulares, llevó a la presentación, por parte de diversas Organizaciones No gubernamentales (ONG), de la iniciativa popular conocida como la Ley 3/3, que resultó en las reformas constitucionales de 2015 que crearon el actual Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el nuevo Sistema Normativo de Responsabilidades Administrativas (SNRA) (Fierro, 2017). Destacan cuatro cambios al sistema de responsabilidades anterior:

1. La inclusión de particulares como sujetos obligados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

2. La distinción entre faltas graves y faltas no graves.

3. La separación entre autoridades que investigan las faltas y autoridades que substancian y, en su caso, las sancionan, los mecanismos para garantizar la defensa adecuada y el debido proceso.

4. La designación de competencias a los tribunales de justicia administrativa para sancionar faltas graves de servidoras y servidores públicos y faltas de particulares.

Estos cambios normativos suponen nuevas competencias que derivan en nuevos procesos. A su vez, estos nuevos procesos establecen etapas con procedimientos específicos que deben ser trasparentados y evaluados a la luz de las características del SNA y requieren de la conformación de unidades organizacionales nuevas.

Teniendo como base esta reforma y con fundamento en la vigente CPEUM, las servidoras y los servidores públicos se encuentran sujetos a estas responsabilidades:

1. Incumplimiento de sus deberes y se regula a través de la responsabilidad administrativa de las y los servidores públicos.
2. Directamente ligada a la administrativa consiste en la responsabilidad resarcitoria mediante la cual la servidora o el servidor público responde por los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio de la Federación.
3. El actuar del servidor o la servidora público también se encuentra sujeto a las responsabilidades de tipo penal y civil.
4. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha identificado en su tesis aislada IV.1o.A.T.16 A4 la responsabilidad laboral referida a las obligaciones laborales de las servidoras y los servidores públicos para con su “patrón”, que en este caso se refiere al Estado, en cualquiera de sus niveles dentro del Poder Ejecutivo o Legislativo correspondiente. (Fierro, 2021, págs. 19 - 20).

## **CONCEPTO DE FALTA ADMINISTRATIVA.**

“La falta administrativa es una conducta que conlleva una acción u omisión, que se considera contrataría a la ley, es directamente atribuible y bajo responsabilidad de quien lo realiza, esta se da en el contexto de la administración pública al ser cometidas por los servidores públicos en el cargo para el que fueron contratados” (Dirección de Análisis, Prevención y Políticas Publicas., 2019, pág. 7).

## **¿QUÉ ES LA FALTA O RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA?**

“La responsabilidad es un concepto jurídico que encuentra sus bases en el derecho civil. Es en esta rama del derecho en la que se ha desarrollado en mayor medida y se han distinguido los tipos de responsabilidades. Las distinciones entre responsabilidad por culpa y objetiva encuentran sustento tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, y han sido objeto de interesantes debates jurídicos.

Es precisamente de este concepto de responsabilidad del que surge la llamada responsabilidad de las servidoras y los servidores públicos; sin embargo, poca ha sido la discusión doctrinal respecto de su significado, sus alcances o límites.

La justificación dada a este tipo de responsabilidad se basa en que el poder de represión disciplinaria que permite a la administración corregir los errores y las anormalidades en los servicios públicos encauza la acción administrativa con eficiencia y moralidad.

De acuerdo con Serra Rojas, la responsabilidad en la función pública es la obligación en la que se encuentra el servidor o la servidora del Estado que ha infringido la ley al haber cometido un delito, una falta, causado una pérdida o un daño. Asimismo, señala que el trabajador o la trabajadora al servicio del Estado en el desempeño de su cargo puede incurrir en faltas o delitos que deben ser reprimidos para mantener una eficaz y justa administración (Serra, 1977).

Esto provoca diversos tipos de responsabilidad: la política, la penal, la civil; que aseguran una eficaz actuación de los organismos públicos.

Por su parte, García Enterría (2005) se refiere a la responsabilidad administrativa como la potestad sancionadora en las llamadas relaciones de sujeción especial o de subordinación entre el empleado o la empleada público y su superior jerárquico. Su fin es conceder esta potestad al Estado con el objeto de mantener la disciplina interna de su organización.

La peculiaridad de esta especie de sanciones administrativas reside en dos caracteres:

1. El reconocimiento de una especie de titularidad natural de la administración, derivada del actuar en su propio ámbito interno o doméstico, tutelando su propia organización y funcionamiento,
2. La estimación como ilícitos sancionables, de conductas valoradas con criterios deontológicos más que estrictamente jurídicos.

De esta forma, la noción del sistema de responsabilidades abarca no solamente el apego a la ley, sino el deber moral de los funcionarios y las funcionarias para con el Estado” (Fierro, 2021, págs. 21-22).

## **LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

“La CPEUM establece los contenidos mínimos del nuevo sistema de responsabilidades en el país, dependiendo de los tipos de conducta y de funcionaria o funcionario público o particular de que se trate, de acuerdo con el artículo 109 constitucional, establece los mecanismos jurídicos por medio de los cuales se puede imponer una sanción por responsabilidad son:

a) juicio político (fracción i)

b) juicio penal (fracción II)

c) procedimientos administrativos (fracción III).

A su vez, sienta las bases para la definición de los sujetos del sistema, las conductas reguladas, los procedimientos y objetivos” (Fierro, 2021, pág. 24).

### **SUJETOS DEL SISTEMA.**

“La CPEUM en el artículo 108 constitucional, establece como sujetos de responsabilidad administrativa, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Como puede observarse, este artículo no distingue entre tipos de poderes u órganos constitucionales autónomos. Son sujetos de responsabilidad administrativa tanto los servidores y las servidoras del Poder Ejecutivo como los del Poder Judicial, el Poder Legislativo y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA).

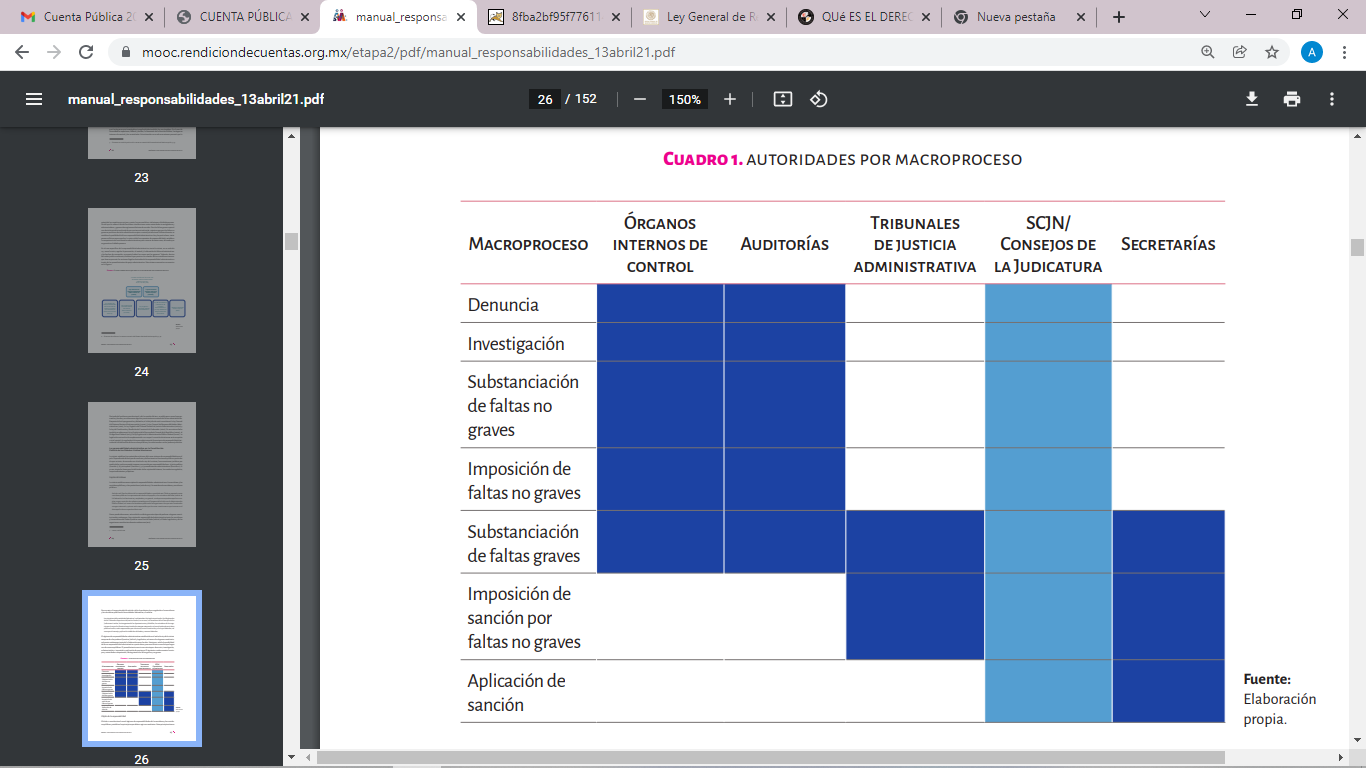
Por su parte, el tercer párrafo del artículo 108 incluye dentro de su regulación a las servidoras y los servidores públicos de las entidades federativas, al señalar:

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales(CPEUM, 2022).

El régimen de responsabilidades administrativas establecido en el artículo 109 de la CPEUM comprende a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como a los órganos constitucionalmente autónomos tanto de la federación como locales. Asimismo, señala la posibilidad de fincar responsabilidad administrativa a particulares, personas físicas o morales que hagan uso de recursos públicos.

El procedimiento cuenta con seis etapas: denuncia, investigación, substanciación e imposición y aplicación de sanciones. El siguiente cuadro muestra las etapas y autoridades competentes, distinguiendo las faltas graves y no graves (Fierro, 2021, págs. 24-25).

**AUTORIDADES POR MACROPOCESO.**



### **OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD EN LA CPEUM.**

“El título IV constitucional crea el régimen de responsabilidades de las servidoras y los servidores públicos y establece los principios que deben regir sus conductas. Estos principios tienen por objeto, como señala Ferrajoli, la incorporación al orden jurídico de valores éticos a fin de dotarlos de consecuencias jurídicas. El artículo 109, fracción III, constitucional señala que las servidoras y los servidores públicos deben conducirse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Dentro de estos principios, la legalidad y la honradez están directamente relacionados con la responsabilidad administrativa.

En un Estado de derecho, los actos de las servidoras y los servidores públicos sólo pueden tomar en cuenta los elementos previamente establecidos como relevantes por las normas, desde la Constitución hasta los reglamentos que permiten la implementación de la acción pública, la que siempre debe estar encaminada a favorecer el interés público y nunca el beneficio personal de un funcionario, una funcionara o un particular (Fierro, 2017).

Al momento de tomar decisiones en la esfera pública, el servidor o la servidora no debe tener en consideración a individuos o intereses particulares salvo lo establecido en el orden jurídico. De modo que la necesidad de garantizar la legalidad y la honradez de las servidoras y los servidores públicos como medios para proteger el interés público es el objetivo principal de la regulación de la responsabilidad administrativa. De modo que la reforma de 2015 estableció como objeto de los sistemas anticorrupción el cumplimiento de los principios y la garantía del derecho a la buena administración. Las responsabilidades administrativas son una de las herramientas para lograrlo” (Fierro, 2021, págs. 25-26).

### **AUTORIDADES COMPETENTES PARA INVESTIGAR, SUBSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.**

De acuerdo con el artículo 109 de la CPEUM, las autoridades competentes para intervenir en el proceso de responsabilidad administrativa son: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los Órganos Internos de Control (OIC) y sus homólogos en las entidades federativas y municipales, los tribunales de justicia administrativa tanto federal como estatales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tratándose de faltas de las y los miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) (Fierro, 2021, pág. 26).

### **ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO EN LA CPEUM.**

“La CPEUM establece la existencia de seis etapas generales en el conocimiento de las responsabilidades administrativas: **1) denuncia, 2) investigación, 3) substanciación, 4) imposición de sanciones, 5) aplicación de sanciones y 6) prevención**. Asimismo, indica dos tipos de procedimientos: aquellos cuyo objeto sean faltas graves (así establecidas en la LGRA) y aquellos cuyo objeto sean faltas no graves (también incluidas en ley general).

Respecto de la denuncia, se establece que cualquier ciudadano o ciudadana, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular una denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre las conductas que puedan constituir responsabilidades.

Las leyes prevén otros tipos de denuncias por parte de particulares, servidores o servidoras públicos. La competencia para recibir denuncias se detalla en LGRA, estableciendo que las autoridades investigadoras también pueden recibirlas.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por las contralorías y las auditorías, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los OIC

Se prevé también la existencia de mecanismos de supervisión de cada una de las etapas. Se anota que los procedimientos de responsabilidad contarán con prerrogativas, pues a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.

Los Tribunales de Justicia Administrativa (TJA) serán las únicas autoridades competentes para fincar a las y los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

Finalmente, en el artículo 113 de la CPEUM se establece la etapa de prevención de responsabilidades administrativas. A través de este artículo se dota al Comité Coordinador del SNA de la competencia para diseñar y promocionar políticas integrales de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. De ahí la importancia de que cuente con información estadística y mecanismos de evaluación que permitan la adopción de mejoras y recomendaciones” (Fierro, 2021, págs. 26-27).

### **SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE.**

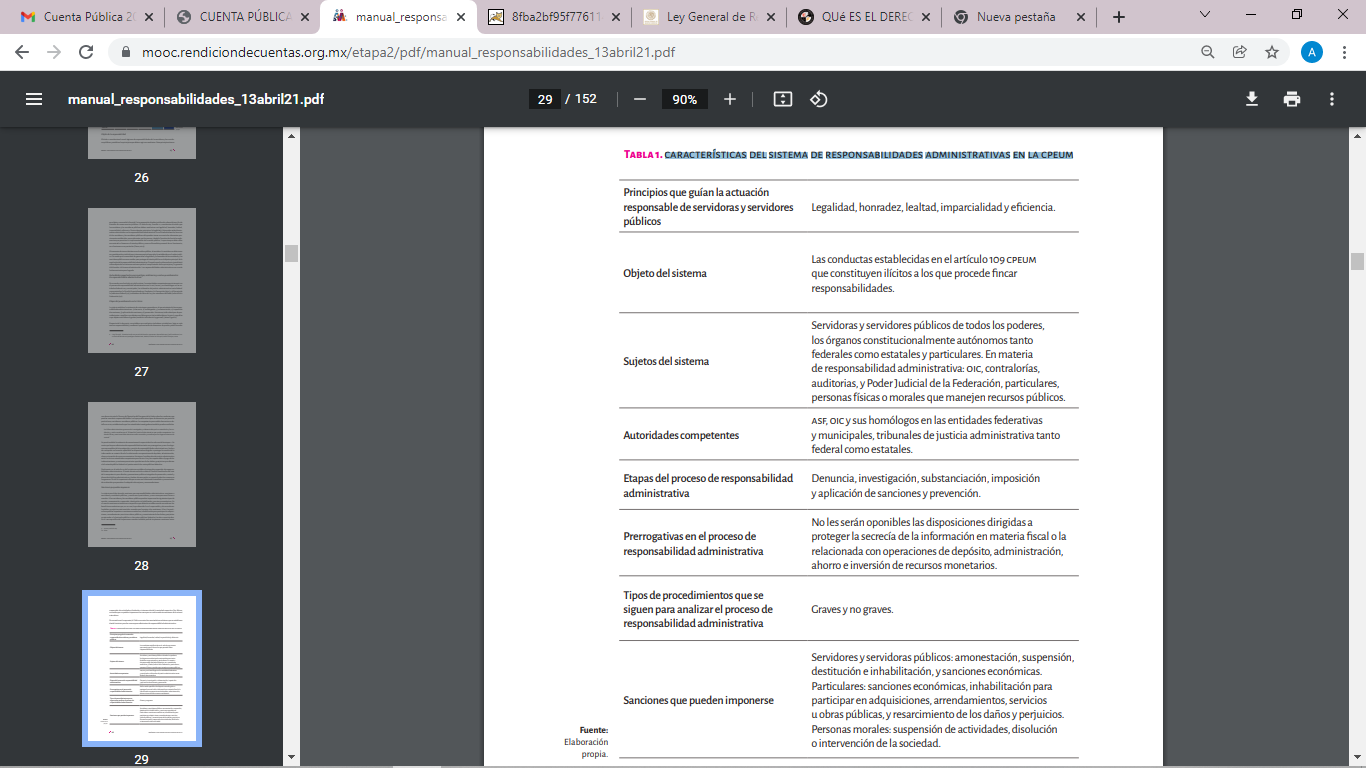
“La CPEUM prevé dos tipos de sanciones por responsabilidades administrativas: sanciones a servidores y servidoras públicos, y sanciones a particulares, ya sea como personas físicas o morales. A las servidoras y los servidores públicos pueden imponerse los siguientes tipos de sanción:

* Amonestación,
* Destitución e Inhabilitación
* Sanciones Económicas.
* Suspensión,

En el caso de sanciones económicas se especifica que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido la o el responsable y de acuerdo con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos o las omisiones. A las y los particulares pueden imponerse: sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, y resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.

En el caso específico de las personas morales también podrán imponerse sanciones como suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva. Por último, se resalta que no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza” (Fierro, 2021, págs. 27-28).

**CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA CPEUM**



## **LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.**

“La LGRA establece como objetivos: definir los principios y las obligaciones que rigen la actuación de las servidoras y los servidores públicos; establecer las faltas administrativas graves y no graves de las servidoras y los servidores públicos, las sanciones correspondientes, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes.

Además, establece las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes. Por otro lado, determina los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas y establece las bases para que todo ente público desarrolle políticas eficaces de ética pública y combate a la corrupción.

Así, la LGRA desarrolla las bases constitucionales y establece en su artículo 1 que es obligatoria para todo el país y tiene por objeto establecer las responsabilidades administrativas de las servidoras y los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o las omisiones en que éstos incurran y las que corresponden a los particulares vinculados con faltas administrativas, así como los procedimientos para su aplicación” (Fierro, 2021, pág. 29).

### **SUJETOS DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA LGRA**

Pueden ser presuntos responsables tanto servidoras y servidores públicos como particulares. En el caso de los primeros, se consideran a las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la CPEUM; es decir, todo integrante del servicio público de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y OCA de los tres niveles de gobierno. Respecto de las y los particulares, se trata de cualquier persona física o moral que maneje recursos públicos (Fierro, 2021, pág. 29).

**AUTORIDADES COMPETENTES PARA INVESTIGAR, SUBSTANCIAR Y RESOLVER EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y SUJETOS INVOLUCRADOS.**

“Es importante identificar a los sujetos del proceso de responsabilidad administrativa, así como el papel de las auditorías en dicho proceso. Las autoridades señaladas como competentes respecto de la responsabilidad administrativa son:

• Autoridad investigadora (AI): autoridades en las secretarías, los OIC, las auditorías, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas Productivas del Estado (EPE), encargadas de la investigación de faltas administrativas.

• Autoridad substanciadora (AS): autoridades en las secretarías, los órganos internos de control, las auditorías, así como las unidades de responsabilidades de las EPE que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) hasta la conclusión de la audiencia inicial.

• Denunciante (D): se trata de la persona física o moral, el servidor o la servidora pública que acude ante las autoridades investigadoras con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas.

• Terceros llamados a juicio: personas que pudieran ser afectadas por el proceso de responsabilidad administrativa.

• Suprema Corte de Justicia de la Nación y/o Tribunales Colegiados (TJ): autoridades competentes para investigar, substanciar, imponer y aplicar sanciones al tratarse del PJF.

• Servicio de Administración Tributaria (SAT): autoridad que interviene en la aplicación de las sanciones económicas o en los embargos.

Como puede observarse, la LGRA agrega un sujeto competente para investigar y substanciar responsabilidades administrativas al tratarse de empresas productivas del Estado. Es así como las únicas excepciones al régimen general de responsabilidades administrativas –investigado y substanciado por órganos internos de control, auditorías y tribunales de justicia administrativa–, que son el PJF y las EPE” (Fierro, 2021, págs. 29-30).

## **OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD.**

“El objeto de los procedimientos de responsabilidad son conductas que se alejan de los principios de legalidad, honradez, objetividad, profesionalismo, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, economía, transparencia, integridad y competencia por mérito, establecidos por la CPEUM y la LGRA y que se tipifican como ilícitos que actualizan supuestos de responsabilidad.

La LGRA establece en su artículo 49 las conductas que pueden ser consideradas como faltas no graves, en las que los OIC o contralorías son los competentes para investigar y substanciar las que transgredan las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con sus funciones con disciplina y respeto.
2. Denunciar faltas administrativas.
3. Atender las instrucciones legales de sus superiores.
4. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
5. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información por razón de su empleo e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.
6. Supervisar a las servidoras y los servidores públicos sujetos a su dirección.
7. Rendir cuentas.
8. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte.
9. Cerciorarse, antes de cualquier negociación, de que las y los particulares con los que se trata no tienen conflicto de interés.
10. Causar daños y perjuicios a la hacienda pública o entes públicos sin dolo.

Por su parte, las faltas graves se encuentran previstas en los artículos 52 a 64 de la LGRA. En estos casos, además de los OIC y las contralorías, las auditorías son competentes para investigar y substanciar, y se refieren a:

1. Cohecho.
2. Peculado.
3. Desvío de recursos.
4. Utilización indebida de información.
5. Abuso de funciones.
6. Actuación bajo conflicto de interés.
7. Contratación indebida.
8. Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.
9. Tráfico de influencias.
10. Encubrimiento.
11. Desacato.
12. Obstrucción de la justicia.

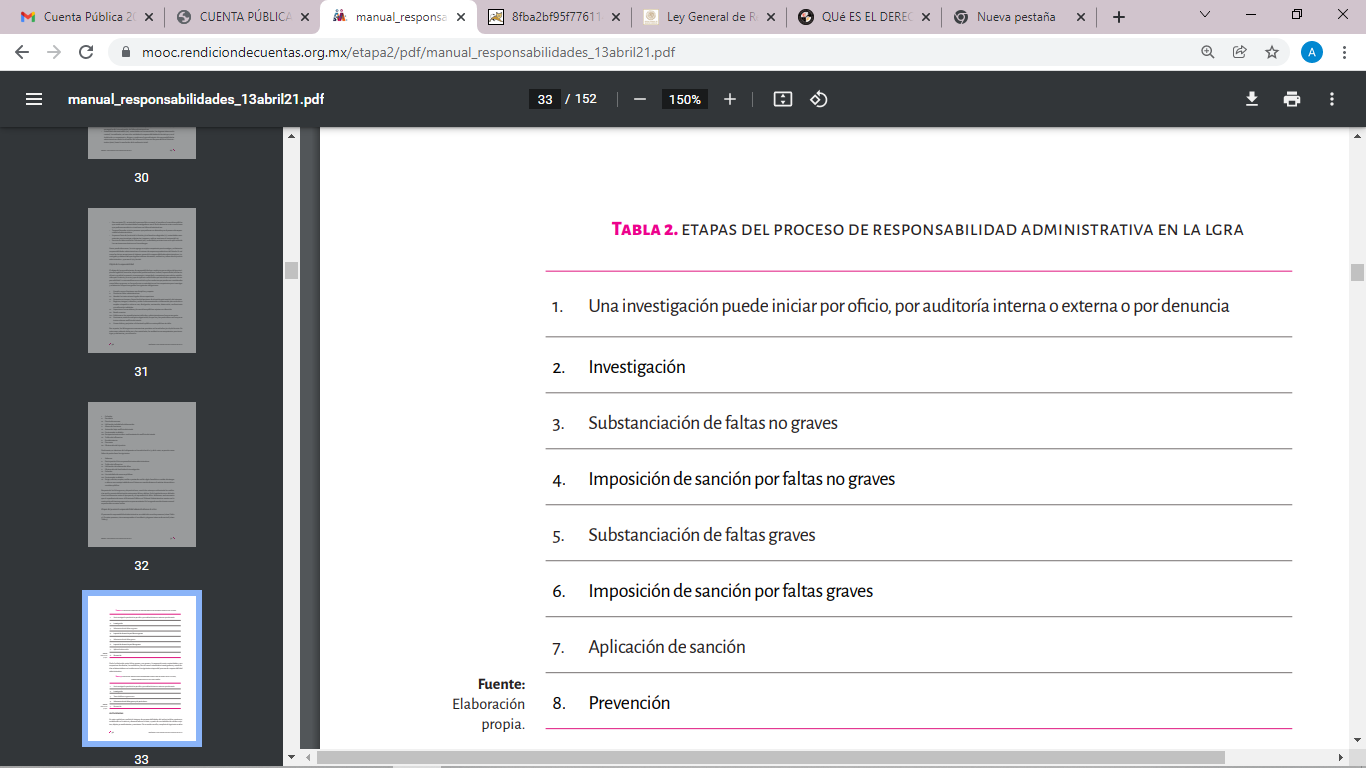
Finalmente, en términos de lo dispuesto en los artículos 66 a 73 de la LGRA, se prevén como faltas de particulares las siguientes:

1. Soborno.
2. Participación ilícita en procedimientos administrativos.
3. Tráfico de influencias.
4. Utilización de información falsa.
5. Obstrucción de facultades de investigación.
6. Colusión.
7. Uso indebido de recursos públicos.
8. Contratación indebida.
9. Exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir algún beneficio a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor o servidora público.

Respecto de las faltas graves y de particulares, uno de los retos que enfrentarán las auditorías será la correcta delimitación entres estas faltas y delitos. En la legislación no es del todo claro las diferencias entre el tipo penal y el supuesto de la falta.

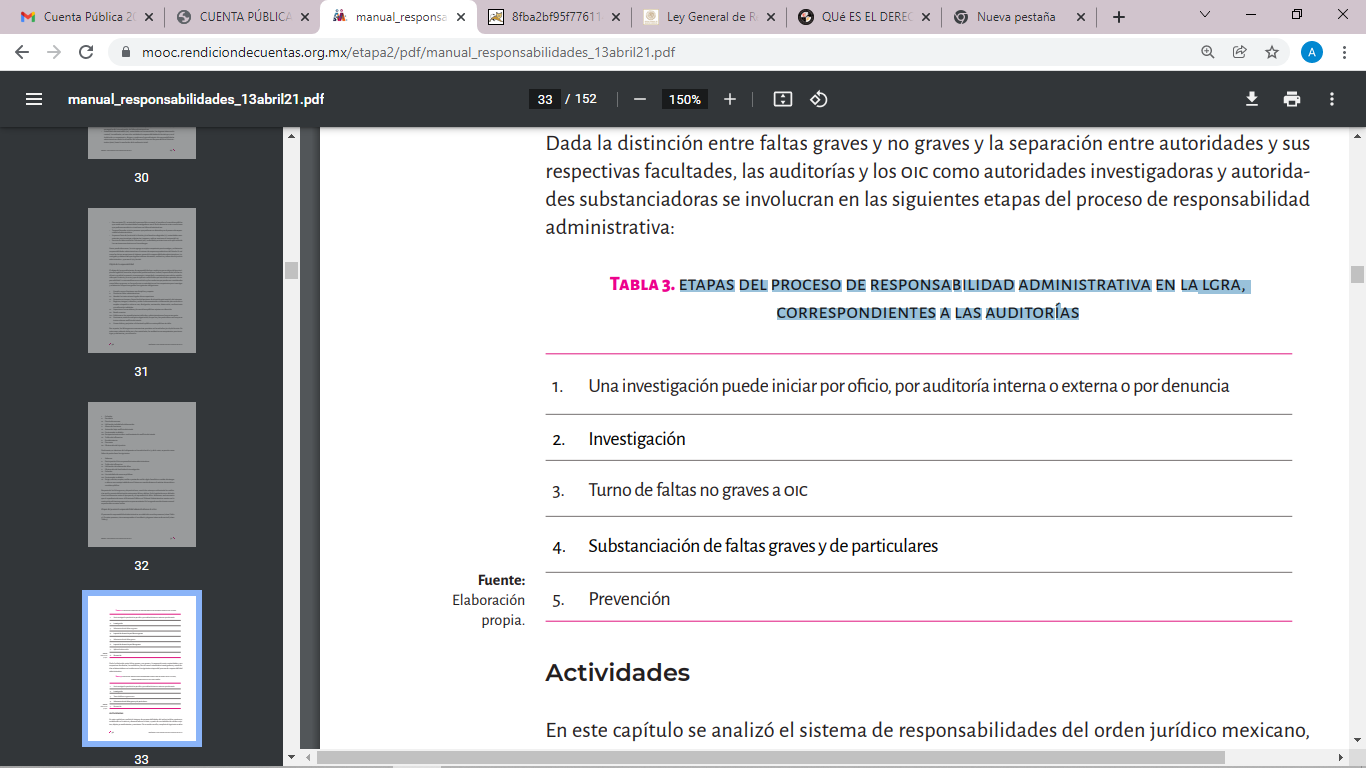
Asimismo, será necesario que el expediente de turno al Ministerio Público o al Tribunal Administrativo cuente con la motivación suficiente que garantice su procesamiento” (Fierro, 2021, págs. 30-31).

**ETAPAS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.**

[[1]](#footnote-1)

Dada la distinción entre faltas graves y no graves y la separación entre autoridades y sus respectivas facultades, las auditorías y los OIC como autoridades investigadoras y autoridades substanciadoras se involucran en las siguientes etapas del proceso de responsabilidad administrativa:

**ETAPAS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA LGRA, CORRESPONDIENTES A LAS AUDITORÍAS**



## **IMPOSICIÓN DE SANCIONES.**

“La imposición de sanciones se encuentra prevista en los artículos 76 de la LGRA para el caso de faltas no graves y en los artículos 80, 82 y 84 a 89 de la LGRA para faltas graves y de particulares. En aquellos casos en los que la autoridad substanciadora decida que existe responsabilidad administrativa no grave, debe proceder al análisis del nivel jerárquico, las condiciones exteriores, los medios de ejecución y la reincidencia del servidor o la servidora público presunto responsable.

Con base en este análisis, la autoridad substanciadora puede imponer una amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación. Asimismo, podrá imponer más de una de estas sanciones. Una vez impuesta la sanción, el presunto o la presunta responsable podrá impugnar a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

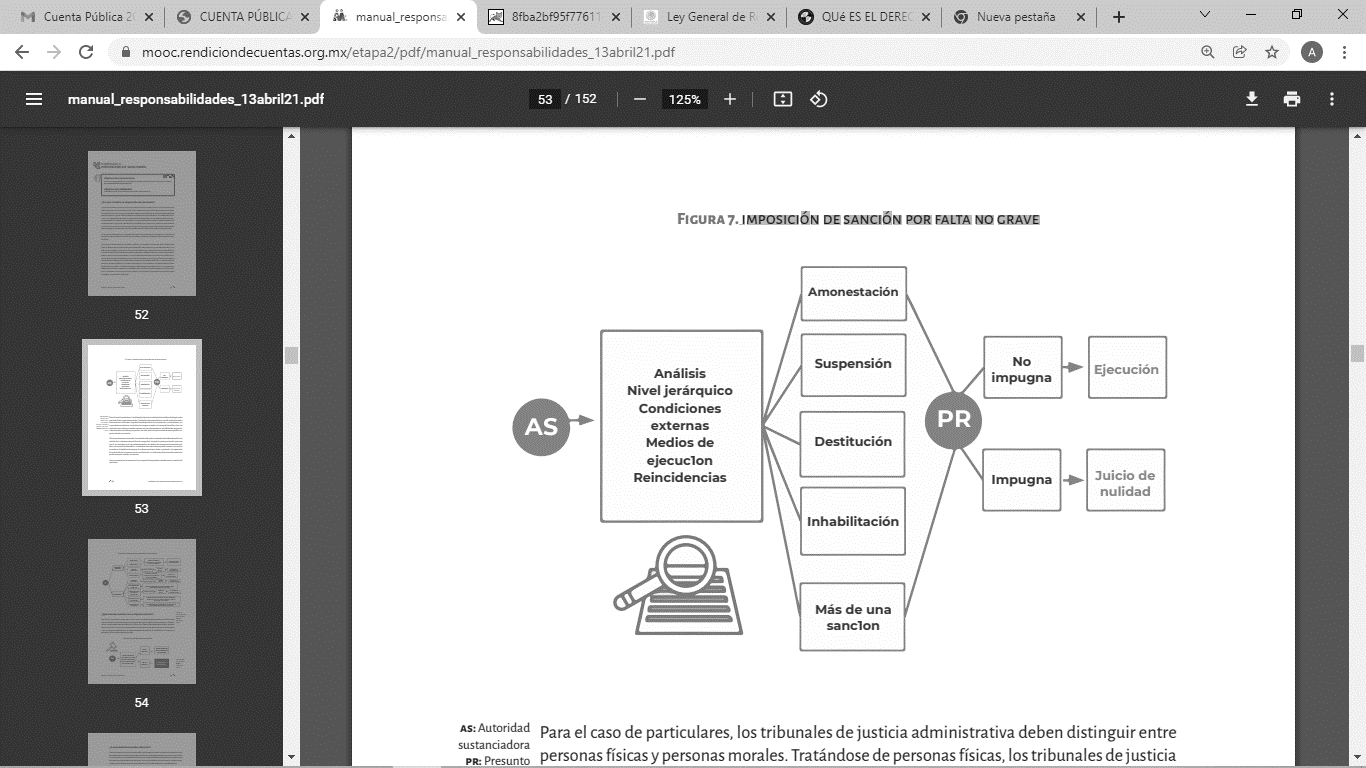
En el caso de faltas graves, la imposición cuenta con más etapas procesales y se divide en imposición de sanciones a servidoras y servidores públicos e imposición de sanciones a particulares.

Para el caso de servidoras y servidores públicos en aquellos casos en los que el TJA determine que existió falta administrativa grave, debe decidir si esta falta provocó daños y perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos.

En caso de decidir que existieron daños y perjuicios, deberá imponer la indemnización de daños y perjuicios correspondiente. Una vez impuesta esta indemnización o en aquellos casos en los que se hubiera decidido que no existieron daños y perjuicios, el TJA deberá analizar los daños y perjuicios causados por la falta, el nivel jerárquico de la o el servidor público, las condiciones externas, la reincidencia y el monto del beneficio, realizado este análisis, el TJA puede imponer una suspensión, destitución, sanción económica o inhabilitación.

El tribunal puede imponer más de una de estas sanciones. Una vez impuesta la sanción, el presunto o la presunta responsable podrá impugnar a través de la apelación” (Fierro, 2021, pág. 51).

**IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR FALTA NO GRAVE**

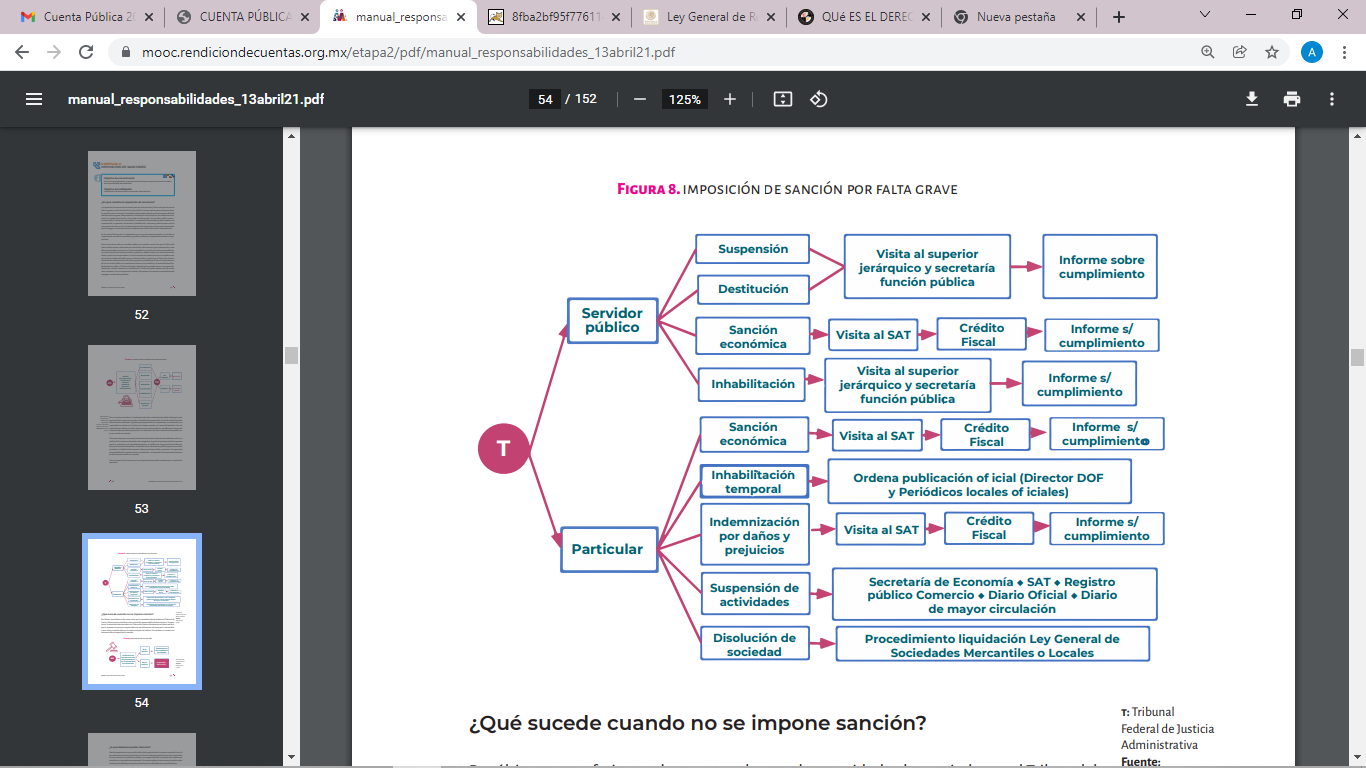


(AS: Autoridad sustanciadora. PR: Presunto responsable (servidor o servidora público o particular))

“Para el caso de particulares, los tribunales de justicia administrativa deben distinguir entre personas físicas y personas morales. Tratándose de personas físicas, los tribunales de justicia administrativa analizarán el grado de participación de la o el particular, su reincidencia, sus capacidades económicas, los daños y los riesgos causados y el monto del beneficio. Una vez realizado este análisis se puede imponer una sanción económica, inhabilitación temporal e indemnización por daños y perjuicios.

Al tratarse de personas morales, los tribunales de justicia administrativa deberán realizar un análisis de la existencia de políticas de integridad, el grado de participación de la persona moral, su reincidencia, la capacidad económica, los daños y los riesgos para la actuación pública y el monto de los beneficios. Analizados estos elementos se puede imponer una sanción económica, inhabilitación temporal, indemnización por daños y perjuicios, la suspensión de actividades de la persona moral o su disolución. Los TJA podrán imponer más de una sanción. Una vez impuestas las sanciones, las y los particulares pueden inconformarse a través de la apelación” (Fierro, 2021, pág. 52).

**IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR FALTA GRAVE**

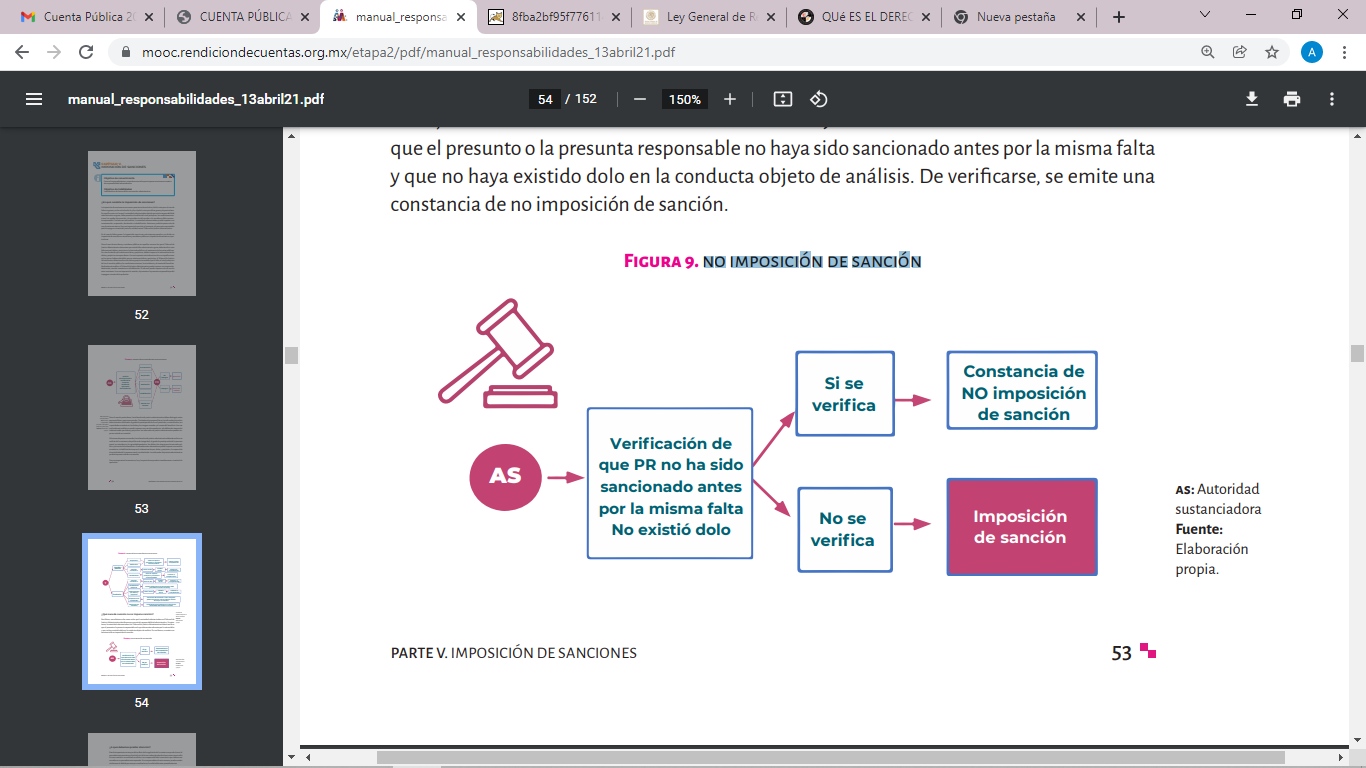


(T: Tribunal Federal de Justicia Administrativa)

**¿QUÉ SUCEDE CUANDO NO SE IMPONE SANCIÓN?**

Por último, nos referimos a los casos en los que la autoridad substanciadora o el Tribunal de Justicia Administrativa decidieron que no existió responsabilidad administrativa. En estos casos, la autoridad substanciadora o el Tribunal de Justicia Administrativa deberá verificar que el presunto o la presunta responsable no haya sido sancionado antes por la misma falta y que no haya existido dolo en la conducta objeto de análisis. De verificarse, se emite una constancia de no imposición de sanción (Fierro, 2021, pág. 53).

**NO IMPOSICIÓN DE SANCIÓN**

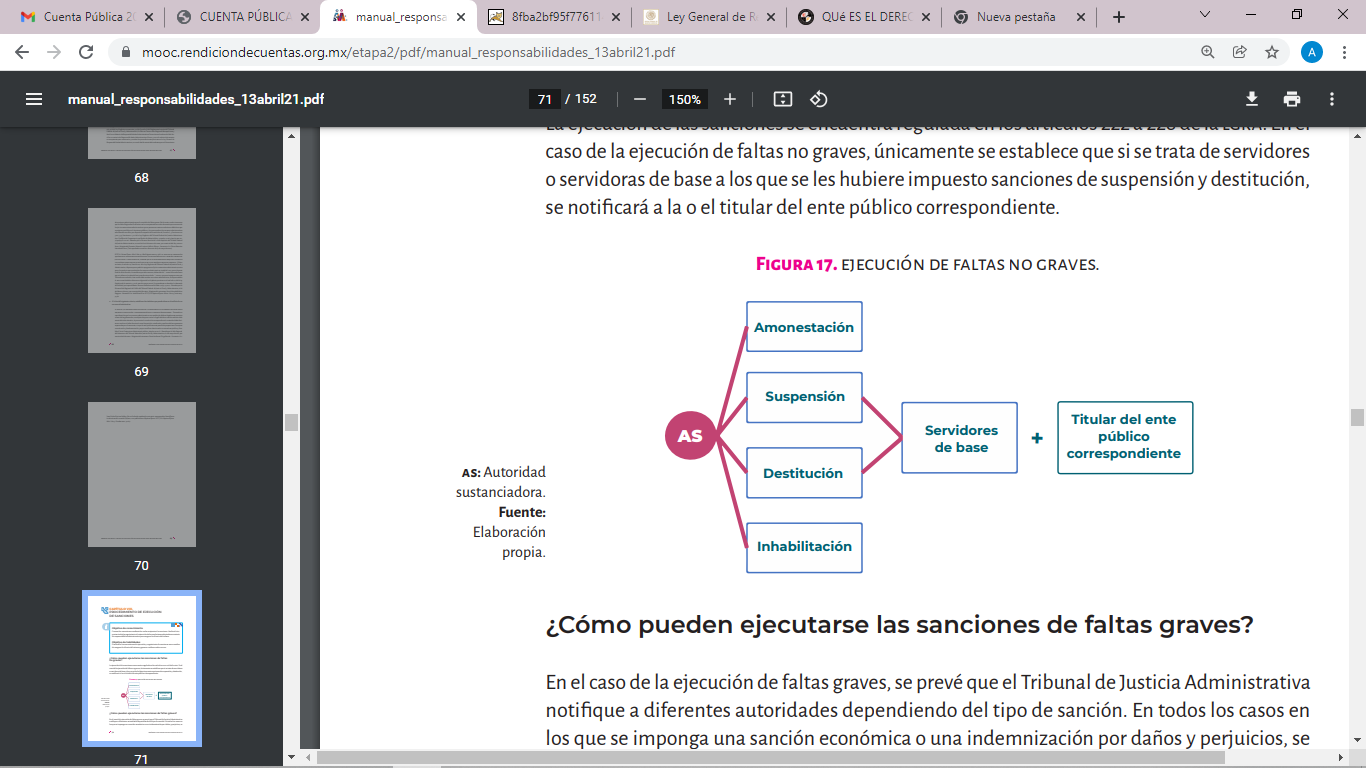


(AS: Autoridad sustanciadora)

**¿CÓMO PUEDEN EJECUTARSE LAS SANCIONES DE FALTAS NO GRAVES?**

“La ejecución de las sanciones se encuentra regulada en los artículos 222 a 228 de la LGRA. En el caso de la ejecución de faltas no graves, únicamente se establece que, si se trata de servidores o servidoras de base a los que se les hubiere impuesto sanciones de suspensión y destitución, se notificará a la o el titular del ente público correspondiente” (Fierro, 2021, pág. 70).

**EJECUCIÓN DE FALTAS NO GRAVES**



(AS: Autoridad sustanciadora.)

**¿CÓMO PUEDEN EJECUTARSE LAS SANCIONES DE FALTAS GRAVES?**

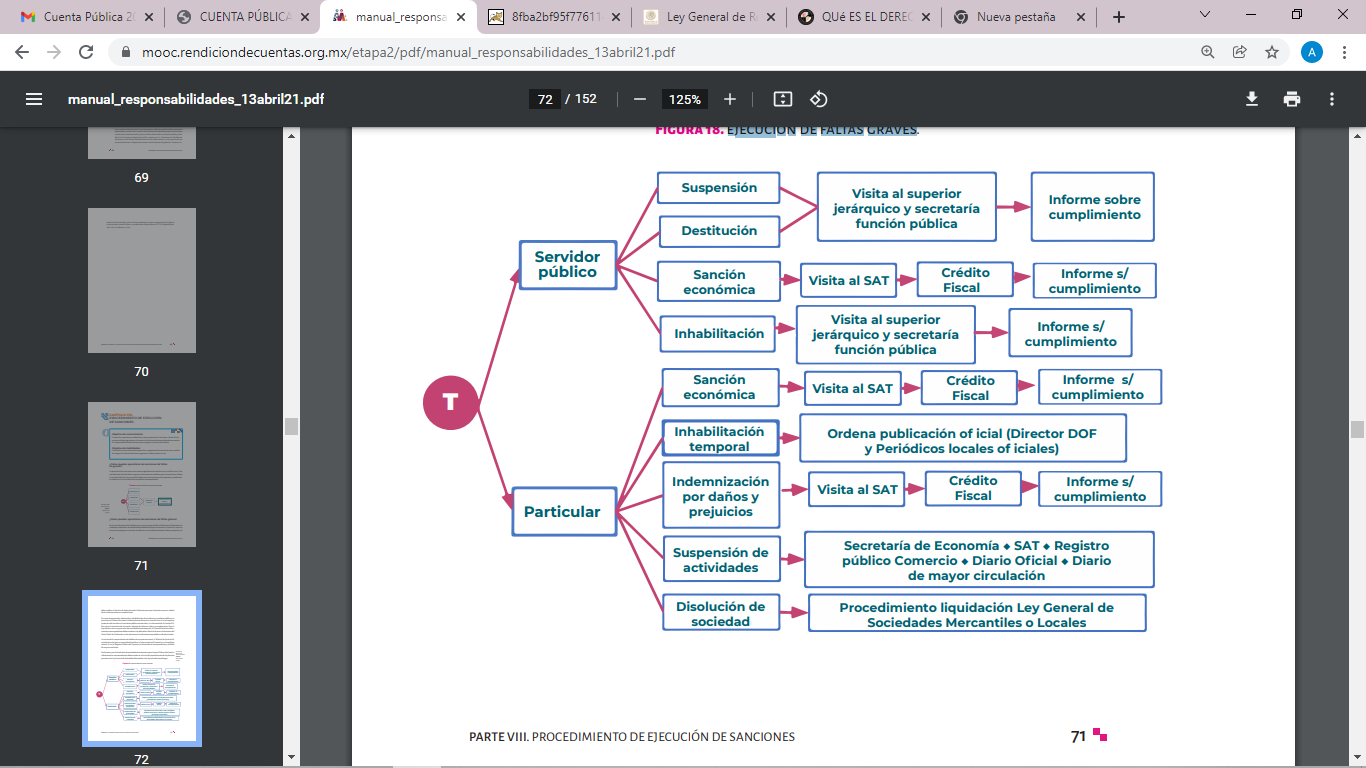
“En el caso de la ejecución de faltas graves, se prevé que el Tribunal de Justicia Administrativa notifique a diferentes autoridades dependiendo del tipo de sanción. En todos los casos en los que se imponga una sanción económica o una indemnización por daños y perjuicios, se debe notificar al Servicio de Administración Tributaria para que lo ejecute como un crédito fiscal e informe sobre su cumplimiento.

En casos de suspensión, destitución o inhabilitación de servidores o servidoras públicos, se prevé que el Tribunal de Justicia Administrativa del que se trate, dé vista a la o el superior jerárquico del servidor o la servidora público sancionado y a la Secretaría de la Función Pública para la ejecución de la sanción, además de informar sobre su cumplimiento. Para la imposición a una o un particular de una inhabilitación temporal, el Tribunal de Justicia Administrativa correspondiente deberá ordenar la publicación oficial al director o la directora del Diario Oficial de la Federación o a los directores o las directoras de periódicos oficiales locales.

Si se trata de la suspensión de actividades de una persona moral, el Tribunal de Justicia Administrativa del que se trate deberá́ notificar a la Secretaría de Economía o su homóloga estatal, al SAT, al Registro Público del Comercio, al diario oficial correspondiente y al diario de mayor circulación.

Finalmente, para la disolución de sociedades únicamente se prevé que el Tribunal de Justicia Administrativa correspondiente deberá ordenar el inicio del procedimiento de liquidación previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles o las leyes locales homólogas” (Fierro, 2021, págs. 70-71).

**EJECUCIÓN DE FALTAS GRAVEZ**

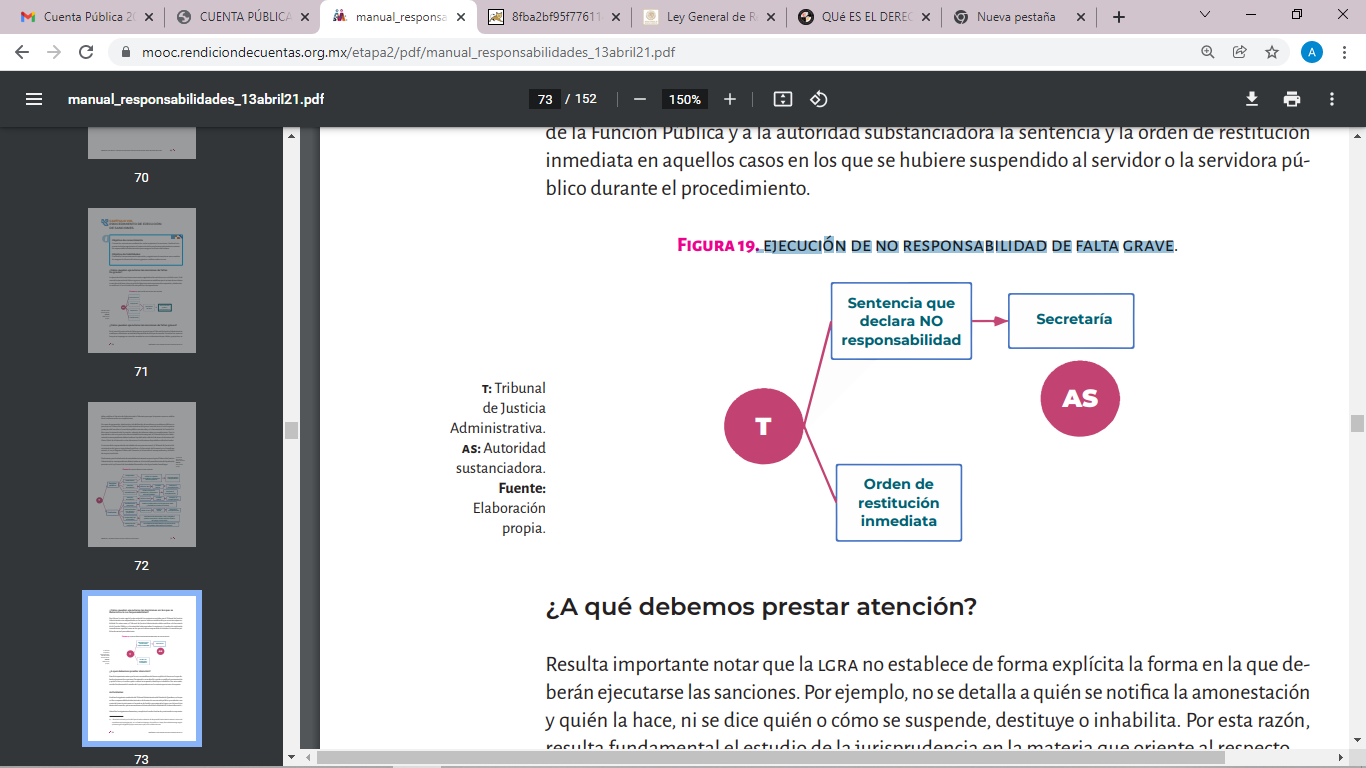


(T: Tribunal de Justicia Administrativa.)

**¿CÓMO PUEDEN EJECUTARSE LAS DECISIONES EN LAS QUE SE DETERMINA LA NO RESPONSABILIDAD?**

“Por último, la LGRA regula la ejecución de las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa correspondiente en las que se hubiera establecido que no existe responsabilidad. En estos casos, el Tribunal de Justicia Administrativa debe notificar a la Secretaría de la Función Pública y a la autoridad substanciadora la sentencia y la orden de restitución inmediata en aquellos casos en los que se hubiere suspendido al servidor o la servidora público durante el procedimiento” (Fierro, 2021, pág. 72).

**EJECUCIÓN DE NO RESPONSABILIDAD DE FALTA GRAVE**



(T: Tribunal de Justicia Administrativa. AS: Autoridad sustanciadora.)

**RETROACTIVIDAD**

**ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL**

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

**PRINCIPIO DE TIPICIDAD**

**La autoridad investigadora deberá demostrar su teoría del caso.**

**ARTÍCULO 135: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**

**LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.**

**NIVEL CONSTITUCIONAL O CONVENCIONAL.**

**ANTIJURICIDAD Y CULPABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO Y/O PARTICULAR.**

**Composición.**

**Elemento Fáctico: hechos relevantes, lógicos y cronológicos.**

**Elemento Probatorio: datos de pruebas obtenidas lícitamente.**

**Elemento Normativo: análisis dogmático de la falta administrativa.**

**DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.**

1. **CPEUM.**
2. **CRITERIOS Y JURISPRUDENCIA.**
3. **ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA TEORÍA DEL DELITO EN MATERIA PENAL.**
4. **DOCTRINA EN EL TEMA**
5. **EXISTENCIA DE UNA SANCIÓN HACIA EL SERVIDOR PÚBLICO; IMPLICA PRINCIPIO DE TIPICIDAD.**
6. **PRINCIPIO DE LEGALIDAD: FALTAS ADMINISTRATIVAS.**
7. **PROHIBICIÓN DE ANALOGÍA.**

**ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.**

**PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, TIPICIDAD Y CULPABILIDAD**

**INFRACCIONES Y DELITOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.**

**ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN XXIX-V.**

**Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.**

**APLICACIÓN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATVAS CON RELACIÓN A LA GRAVEDAD DE LA FALTA: ATENUANTES Y AGRAVANTES**

**GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ADMINISTRATIVAS; PROTEJAN, AVALEN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.**

**SE VIOLENTA EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD SI LA FALTA ADMINISTRATIVA Y/O SU SANCIÓN DEVIENE DE UN REGLAMENTO O DOCUMENTO EMITIDO POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, PUES LA MISMA CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL “PODER LEGISLATIVO”.**

**PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD EN LOS TIPOS DISCIPLINARIOS.**

**LA REGLA BÁSICA PARA LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD EN EL DERECHO DISCIPLINARIO SON LOS SIGUIENTES:**

**LA FALTA DISCIPLINARIA DEBE ESTAR EN UNA LEY, NATURALMENTE EMITIDA POR EL “PODER LEGISLATIVO”.**

**LA CONDUCTA NO NECESARIAMENTE TIENE QUE ESTAR DESCRITA EN EL TIPO DISCIPLINARIO CON EXACTITUD, SIN EMBARGO, DEBE HABER PRECISIÓN Y NO PERMITIR AMBIGÜEDADES EN LA COMPLEMENTACIÓN TÍPICA, POR LO QUE NO DEBE QUEDAR AL ARBITRIO DE LA AUTORIDAD DE LS DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA TÍPICA.**

**LOS TIPOS DISCIPLINARIOS ABIERTOS COMPUESTOS SE PUEDEN COMPLEMENTAR CON NORMA BLANDA (REGLAMENTOS, ACUERDOS, NORMA ADMINISTRATIVA).**

**LA DISCRECIONALIDAD DE LA AUTORIDAD PARA IMPUTAR RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, MEDIANTE UNA FALTA ADMINISTRATIVA, ESTA LIMITADA CONFORME A LA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN QUE ARGUMENTE CON RESPECTO A LA IDONEIDAD Y PERTINENCIA DEL COMPLEMENTO DE TIPICIDAD.**

**EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD ESTÁ RELACIONADO DE FORMA DIRECTA CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, TIPICIDAD Y EXACTA APLICACIÓN DE LA NORMA.**

**ES EL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA/DISCIPLINARIA.**

**CORRESPONDE AL ÁMBITO LEGISLATIVO DETERMINAR CON PRECISIÓN EN LA LEY CUÁLES SON LAS CONDUCTAS PRIHIBIDAS Y ADEMÁS LAS SANCIONES.**

**NO VIOLENTAR DERECHOS HUMANOS.**

**NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN A LOS IMPUTADOS (SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES).**

**EVITAR ANALOGÍA.**

**EVITAR LA APLICACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE NO ESTAN EN LA LEY O APLICAR DETERMINADA NORMA BLANDA (ACUERDOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA O REGLAMENTOS), DE FORMA CREATIVA POR LOS OPERADORES JURÍDICOS.**

# **CONCLUSIÓN.**

Dentro del esquema normativo, existen medidas de sanción plasmadas en las leyes, que hacen que a toda persona que represente al estado y realice acciones que alteren, dañen o pausen el trabajo correcto de las instituciones tengan una penalización a los hechos que contravengan el deber ser.

Debido a los actos ilegales que los servidores públicos y particulares cometían en el desenvolvimiento de sus labores desde hace tiempo, es necesario que en el sistema jurídico normativo se implementaran las sanciones y para esto se les denominó a esos actos ilegales como faltas administrativas.

Es indispensable sancionar a las faltas administrativas, ya que en ningún lado debe haber corrupción, por lo que se busca la legalidad y transparencia, como lo especifican los principios que están dentro de las leyes.

El combate a la corrupción es el principal factor por el cual son sancionados los servidores públicos y particulares que cometen cierta falta administrativa, de aquí depende la gravedad del acto cometido para que se le sancione al imputado, siendo así llegar a causas de gravedad, como del tipo penal.

Sin embargo, se deben analizas las faltas administrativas que las personas hayan cometido, ya que de esto depende si la situación se agrava o se atenúa, por obviedad se puede decir que, dependiendo del acto cometido, dependerá si la situación se agrava o la sanción que se imponga pueda ser mínima.

Es necesario sancionar las faltas administrativas que se cometen para poder llegar a un estado de derecho, parcialidad, objetividad, transparencia y legalidad, para que así todas y todos hagan su trabajo de la mejor manera posible, pero principalmente para que no haya corrupción y sepan todos aquellos que cometan una falta administrativa, que son actos que se sancionan.

# **BIBLIOGRAFÍA**

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General De Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo114654.html>

Manual sobre faltas administrativas y delitos de corrupción de servidoras y servidores públicos y particulares. ANA ELENA FIERRO. ADRIANA GARCÍA. LAURA ROJAS. RAÚL MEJÍA. 13 de abril del 2021. <https://www.mooc.rendiciondecuentas.org.mx/etapa2/pdf/manual_responsabilidades_13abril21.pdf>

Faltas administrativas (2009) <https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2017/8/12/8fba2bf95f776114b77cad7ea63cd723.pdf#:~:text=%2D%20Por%20infracci%C3%B3n%20o%20falta%20administrativa,delito%2C%20de%20lo%20contrario%20se>

Padilla, Lizbeth (2021) La Dogmática Disciplinaria. Editorial Flores.

1. Extraído de Fierro, 2021, pág. 32 [↑](#footnote-ref-1)